

Educación de Medina, por ejemplo, es la joven estrella del gabinete. Pero esa brillante trayectoria se ve cortada abruptamente por el golpe de estado de 1945, que lo lanza durante unos años a un exilio neoyorkino que será, por cierto, muy bien aprovechado para el trabajo académico. Dieciocho años más tarde, habiendo sido ya senador independiente, la realidad política lo reclama de nuevo a tiempo completo como candidato a la Presidencia y fundador de un partido que recoge el descontento popular. Aunque pierde las elecciones, al no poder competir con las aceitadas maquinarias partidistas, la campaña electoral lo hace llegar hasta las más alejadas poblaciones del país y su figura queda establecida como sinónimo de ecuanimidad, de rectitud y de independencia de criterio, tanto respecto de los llamados “partidos del estatus” como de sus detractores de la izquierda. Por eso, hasta muy avanzada edad, fue sujeto predilecto de numerosísimas entrevistas (véanse en especial los libros de Alfredo Peña, 1978, Margarita Eskenazi, 1988, y Rafael Arráiz Lucca, 2001) e invitado de gala de diversos programas televisivos de opinión.

Nadie, por otra parte, ha tenido en Venezuela una conciencia tan aguda como Uslar de la necesidad de alcanzar al gran público con un mensaje de orientación ciudadana, opinión política y divulgación cultural. El primer vehículo de esa pulsión es el artículo de opinión, y es admirable la persistencia de su colaboración semanal en el diario *El Nacional* a través de la muy popular y comentada columna “Pizarrón”, iniciada en 1948, que alcanzó el récord de los cincuenta años de existencia. También fue el primero en advertir la eficacia de la televisión y sus peculiares exigencias. Desde 1953, a través de su programa *Valores humanos* se introduce semanalmente, de manera casi ininterrumpida y a lo largo de casi 35 años, en miles de hoga-

res venezolanos, pasando a ser, para el grueso de la población, una suerte de modelo (para muchos de ellos sin duda inalcanzable) del hombre culto.

Su trayectoria literaria y política, y sobre todo esa presencia tan sostenida a través de los medios, convirtieron pues a Uslar en verdadero patriarca cultural de la nación, respetado y acatado por muchos, hasta por sus adversarios de la izquierda, criticado por quienes leyeron su insistente prédica pública como mensaje de las clases dominantes. Lo cierto es que, por más de medio siglo, Venezuela tuvo en Uslar una conciencia crítica lúcida, honesta y bien documentada que tal vez todos debimos escuchar con más atención y a la que hoy no podemos sino echar de menos.

Carlos Pacheco es profesor de la Universidad Simón Bolívar, Caracas.

Agustín E. Ferraro

Argentina: lecciones políticas de la crisis

La economía argentina sufrió en los últimos meses una prolongada y severa crisis, con características bastante novedosas en el contexto de las finanzas internacionales. Su detonante principal fue la “perspectiva” de que el Estado no pudiera seguir pagando, en un futuro más o menos inmediato, los intereses de la deuda pública. De haber ocurrido esta circunstancia, conocida como *default*, se supone que hubiera debido abandonarse, además, la paridad del peso argentino con el dólar de los Estados Unidos. Lo novedoso de la

crisis es, justamente, que “nada de todo esto haya ocurrido”. Hasta la fecha, otras crisis de los mercados emergentes habían consistido en el hecho (efectivo) de que se produjera una brusca devaluación o una suspensión del pago de intereses de la deuda pública. En el caso argentino de este año, la mera “perspectiva” fue suficiente para generar una reacción que, por momentos, parecía idéntica a la que hubiera acompañado la ocurrencia real de los fenómenos previstos.

Sin duda, la economía argentina tiene debilidades estructurales que hacen difícil mantener el equilibrio de las cuentas públicas y pagar los intereses de la deuda estatal. Pero las debilidades estructurales no son nuevas (la recesión afecta a Argentina desde hace por lo menos tres años). Algún factor adicional hizo que, en un momento determinado, se haya producido una reacción de alarma en el sistema financiero internacional. Bien puede tratarse de un elemento psicológico, parcialmente inexplicable. Pero algunos analistas señalan también que, en este tipo de situaciones, no deben descartarse los efectos de una maniobra especulativa relativamente común. Pues la devaluación de una moneda es uno de los mejores negocios en las finanzas internacionales y este tipo de operación ha adquirido una dimensión casi legendaria desde que George Soros ganó sumas fabulosas (y fama mundial) al especular exitosamente contra la libra esterlina. Los especialistas no descartan que algunos inversores carentes de escrúpulos, que han tomado posiciones especulativas apostando a la devaluación de una moneda, hagan correr rumores de que el *default* y la devaluación son inminentes, con lo que se genera una tendencia que hace a la devaluación mucho más probable.

Una de las principales ventajas de la introducción de la moneda común en Europa ha sido, precisamente, la de volver

casi imposible un tipo de especulación como la expuesta, por el mero volumen de la masa de dinero que está en juego. La crisis argentina obliga a revisar la estrategia monetaria de los mercados emergentes y hace que la introducción de una moneda común para entidades como el Mercosur deba considerarse mucho más urgentemente que antes.

Lo que me interesa discutir en lo que sigue, sin embargo, son las consecuencias políticas que se siguen de la crisis y la forma en que estas consecuencias están siendo interpretadas en Argentina. Pues si bien la crisis tuvo la característica novedosa de no haberse producido en la realidad, sus efectos han sido plenamente perceptibles. Ante las repetidas predicciones de una inminente suspensión de pagos, el Gobierno argentino ha puesto en práctica el llamado “plan de déficit cero”, por el cual se produce una severa reducción en los gastos del Estado, que afecta especialmente a los salarios de los empleados públicos, a las jubilaciones y a las pensiones. Esto debe garantizar la capacidad del Estado de hacer frente al pago de intereses de la deuda. Pero ante una recesión económica que ya lleva al menos tres años, las nuevas medidas generan una gran angustia y destruyen toda esperanza de salir del estancamiento en un futuro inmediato. En medio de una generalizada depresión y un crecimiento catastrófico de la pobreza, el futuro mismo de la democracia en este país parece estar en peligro.

¿Otra pérdida de legitimidad?

En Argentina se realizarán elecciones de legisladores federales en octubre de 2001, para renovar la totalidad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Una de las características más destacadas de las elecciones es la previsible baja con-

currencia de los ciudadanos, menor que en cualquier ocasión anterior desde el retorno de la democracia en 1983, según surge de las encuestas. En esta falta de interés por las propuestas de los partidos políticos detectan algunos observadores una amenaza para el sistema democrático.

Es muy cierto que, según lo perciben muchos ciudadanos, durante los últimos años los principales partidos políticos han mostrado poca iniciativa o poco ingenio en la búsqueda de soluciones para la recesión en la economía, para la altísima desocupación y el crecimiento de la pobreza, para el aumento de la delincuencia y otros serios problemas que sería largo enumerar. La crisis de los últimos meses hace más profundo un gran desencanto, tanto con la alianza gobernante como con la oposición. Con todo, los analistas estiman que la concurrencia de votantes en ningún caso será inferior al 70%, un porcentaje menor al que se registró en la elección inmediatamente anterior, que estuvo en el orden del 73%, pero relativamente alto si consideramos la afluencia normal de votantes en las democracias más avanzadas.

Pero no solamente en estos términos comparativos debe considerarse, a mi modo de ver, que es errónea y apresurada la interpretación del previsiblemente alto porcentaje de absentismo como un peligro para la democracia. Si analizamos los presupuestos de dicha interpretación, puede notarse que ella se vincula a la concepción de la democracia expresada en la figura jurídica del "voto obligatorio", vigente en nuestros días en Argentina, con su pretensión objetiva de que un 100% de los ciudadanos, ya sea por propia voluntad o porque temen ser sancionados, concurran a votar. Claro que, normalmente, es una ficción pretender que un 100% de los votantes se hagan presentes para una elección determinada. Pero en Argentina, desde el retorno de la democracia en 1983 y hasta

hace pocos años, era frecuente que se indicaran porcentajes de asistencia superiores al 90%. Las cifras actuales causan inquietud cuando se las contrasta con este pasado de generalizado acatamiento a la obligación de votar. Todavía en nuestros días, existen movimientos de protesta que consisten en que un grupo de ciudadanos se organizan para desplazarse hasta 500 kilómetros de su lugar de residencia, con lo que son eximidos de la obligación de votar (deben registrarse ante la policía del lugar en donde se encuentran para demostrar el hecho). Pero la mayor parte de los ciudadanos que no asisten a votar confían en que no les serán aplicadas las sanciones correspondientes, debido precisamente a la gran cantidad de infractores.

La pregunta es si este proceso político, que debe calificarse como una progresiva desobediencia civil, puede interpretarse en términos análogos al ausentismo electoral en otros sistemas democráticos donde el voto es un derecho. Nótese que el voto obligatorio presupone que el ciudadano debe ser obligado, bajo amenaza de sanciones, a manifestar su opinión sobre las propuestas de los partidos políticos. No puede ponerse en duda que la democracia está siendo concebida aquí de una manera "tutelar", "paternalista", donde se pretende que los ciudadanos tienen que ser "forzados" a ejercer sus libertades políticas, por su propio bien, ya sea que prefieran hacerlo o no. Por lo común, se cree que dicha paradójica obligación de "ser libre bajo amenaza de sanciones tendrá un carácter provisorio", hasta que los ciudadanos se hayan acostumbrado a la libertad y ésta comience a parecerles atractiva. Pero que nadie puede acostumbrarse a la libertad si no ha sido antes liberado, es un hecho evidente que viene siendo señalado por lo menos desde el escrito de Kant "La Religión dentro de los límites de la mera razón" publicado en 1793. La

obligación de votar no es una libertad política sino una herramienta tutelar de dudosas intenciones pedagógicas.

Un segundo argumento con que se intenta fundamentar el voto obligatorio consiste en sostener que, de esta forma, el ciudadano no puede resultar intimidado para que desista de votar. Dicha intimidación podría ser llevada a cabo, por ejemplo, por los esbirros de algún grupo político, para evitar que quienes no son sus seguros simpatizantes emitan el voto. El argumento es tan extravagante que su consideración sólo se justifica en el hecho de que muchos, a pesar de todo, lo comparten y sostienen. A su respecto basta solamente señalar lo siguiente: para combatir la intimidación ejercida por aquellos que no respetan las reglas de la democracia, en vez de perseguir a éstos, se propone aquí ejercer una intimidación todavía mayor sobre el ciudadano, respaldada esta vez por la fuerza pública. Esto es consistente con la idea (auto contradictoria) de obligar a ser libre: como modo de restarle efecto a las amenazas que buscan impedir el voto, se lanzan sobre el ciudadano amenazas más graves y ominosas que las primeras, para obligarlo pese a todo a votar. ¿Alguien puede pensar que este escenario corresponde a una democracia? Más que un ciudadano libre, el votante es en este contexto un rehén de fuerzas de las que no puede defenderse.

Si se considera el contexto histórico de las concepciones de la democracia en Argentina y Latinoamérica, finalmente, con el predominio del tipo denominado por O'Donnell "democracia delegativa", puede percibirse que la función política del voto obligatorio tampoco ha sido la de consolidar ninguna clase de libertades. Las democracias latinoamericanas nacieron, en la mayor parte de los casos, bajo una concepción paternalista y represiva del rol del ciudadano, en donde se daba

por descontado que las decisiones políticas habrían de ser tomadas por una pequeña elite de líderes y especialistas. El carácter "delegativo" de las democracias de esta región se corresponde precisamente con este fenómeno: desde el nivel constitucional mismo, las decisiones políticas son tomadas por una minoría, la que procede luego a exigir jurídicamente la lealtad de las masas. En Argentina se produce un interesante ejemplo con el así llamado "pacto de Olivos" de 1993. El presidente argentino en aquél entonces, Carlos Menem, y el presidente argentino hasta 1989, Raúl Alfonsín, decidieron mediante un acuerdo, que dio en conocerse como "la democracia de dos", los contenidos fundamentales de la reforma constitucional, que sería luego sancionada por una Asamblea Constituyente (en 1994).

En este contexto, el voto obligatorio tiene el propósito de forzar a los ciudadanos a participar del proceso por el cual esas decisiones se convierten en normas vinculantes, con lo que su legitimidad queda asegurada con independencia de la voluntad de aquéllos.

La conclusión es que el crecimiento de los porcentajes de absentismo electoral en Argentina no significa ninguna amenaza para la democracia. El absentismo revela más bien que los ciudadanos están convirtiendo, mediante su desobediencia, la herramienta represiva del voto coactivo en el derecho de votar.

Una vez que asumimos una transformación de la naturaleza del voto, las razones para dejar de concurrir a las próximas elecciones son bastante obvias. Frente a la magnitud de la crisis, los tres principales partidos políticos en el ámbito federal no ofrecen grandes diferencias de programa entre sí. Todos coinciden en apoyar, en los hechos, la estrategia neoliberal elegida por el poder ejecutivo, mientras todos declaran su oposición al neoliberalismo y

al Gobierno (incluso el partido del Gobierno declara su oposición al Gobierno). Que en este contexto muchos ciudadanos no piensen tomarse la molestia de ir a votar, no va en contra de la democracia, sino que es el uso correcto de ella: estos ciudadanos están haciendo notar que los partidos políticos deberían realizar algún esfuerzo en planificar y proponer alternativas, de modo que valga la pena votar por alguno en particular de todos ellos. Por supuesto, muchos políticos están habituados a reaccionar con indignación ante esta actitud algo insolente de los ciudadanos y proclamar en tono apocalíptico el fin inminente de la democracia. No hay que prestarles atención: son aquellos que añoran el tiempo en que casi todos los ciudadanos podían ser forzados a participar de las decisiones que los políticos toman con serena prescindencia de todo debate público.

La primera y principal lección política de la crisis es, a mi juicio, la siguiente: la causa por la que muchos ciudadanos no se presentarán a votar es más bien una cierta deficiencia en los programas presentados por los partidos políticos mismos, antes que una presunta falta de apoyo a la democracia por parte de dichos ciudadanos. Un somero análisis de la política argentina confirma, a mi modo de ver, esta impresión. Pues la opción principal que puede ofrecer la política en una sociedad democrática moderna, a saber, la elección entre programas de gobierno de tipo progresista o conservador, entre la izquierda y la derecha, se encuentra particularmente desdibujada en este país. Voy a dedicar la próxima parte al análisis de este problema.

Modernización política y capacidad de gobierno

En Argentina, existe la impresión generalizada, entre especialistas pero tam-

bién por parte de muchos ciudadanos, de que los partidos políticos tienen dificultades para formar dirigentes con capacidades técnicas de gobierno. Como observa Ana M. Mustapic en su trabajo “El congreso argentino: los partidos políticos como problema y solución” (manuscrito, Buenos Aires 2001), mientras que los partidos políticos argentinos son bastante eficientes para desarrollar campañas electorales, invierten, en cambio, escasos recursos en prepararse para gobernar.

Creo que esta opinión es en buena medida correcta, pero entiendo que debe hacerse una importante excepción al respecto, a saber, que el problema de la dificultad para desarrollar capacidades de gobierno afecta especialmente a la socialdemocracia, esto es, a la izquierda en Argentina. Vale aclarar que entre la izquierda y la socialdemocracia hay una parcial superposición. Además de la socialdemocracia, generalmente existen en la izquierda algunos grupos más radicales. Los partidos políticos que se corresponden con una orientación socialdemócrata son el Frente País Solidario (Frepa-so) y la Unión Cívica Radical (UCR). Este último partido, sin embargo, al igual que el PJ (Partido Justicialista o “peronista”) no puede definirse ideológicamente de manera exacta. El presidente actual, De La Rúa, es miembro de la UCR, pero su perfil político es claramente conservador. Con todo, puede describirse a la UCR como un partido socialdemócrata a partir de la influencia del ex-presidente Raúl Alfonsín (actual presidente del partido), cuyas ideas políticas se identifican claramente con esta corriente ideológica.

Pues a más tardar desde el retorno de la democracia, en 1983, la derecha argentina se ha modernizado en una forma muy perceptible, aunque poco atendida en los estudios especializados. Esta modernización ha consistido, básicamente, en el pro-

gresivo abandono del pasado fascista y fundamentalista católico que la caracterizó durante buena parte del siglo xx, para pasar a adquirir un perfil cada vez más ligado a las doctrinas neoliberales, con un personal directivo integrado por especialistas con formación de postgrado en las más prestigiosas universidades del mundo. A esta renovación doctrinaria se suma un rasgo organizativo de esencial importancia: la creación de importantes centros de investigación y enseñanza en el país, con un staff permanente de científicos. Esto último permite no solamente la producción constante de conocimientos y planificación en cuestiones públicas, sino también la formación de personal especializado. La nueva derecha se caracteriza así por su competencia en el manejo de los aspectos del gobierno que son esenciales para su agenda política, en particular la economía, y por su estilo moderno, técnicamente sólido y cosmopolita.

La nueva derecha argentina ha logrado establecer su agenda de debate en la opinión pública y ponerla en práctica tanto bajo la presidencia anterior como durante la presidencia actual. Su figura más representativa es, claro está, Domingo Cavallo, que ha desempeñado el cargo de ministro de Economía durante varios años en el Gobierno de Menem y ha vuelto a ocupar el mismo Ministerio desde el mes de marzo de 2001. En el proceso de modernización de la derecha representó Cavallo un papel destacado, como director del IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina/ Fundación Mediterránea), creado en Córdoba en 1977. Al día de hoy, el IERAL cuenta con un staff de más de 30 investigadores y becarios, la mayor parte con dedicación completa, en distintas sedes en el país. Otros centros de investigación muy prestigiosos, que también han formado y prestado asistencia y equipo técnico a varios

ministros de Economía en los últimos años, son FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, creada en 1964) y CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, fundado en 1978). Claro está que dichos institutos tienen una inclinación predominante (aunque no excluyente) hacia los estudios económicos, pero esto es consistente con las prioridades de una agenda política neoliberal.

La clase política tradicional ha reaccionado con cierta suficiencia ante la conformación de la nueva derecha. Muchos políticos consideran que este personal especializado solamente tiene capacidades técnicas, pero que las decisiones de importancia siguen a cargo de los líderes del tipo clásico. Esto es una ilusión, por supuesto. La realidad es que la acumulación de capacidades técnicas de gobierno, por parte de este nuevo tipo de actor, pone en evidencia el *amateurismo* de los políticos tradicionales y los condena cada vez más a la irrelevancia. Ha quedado demostrado que, con independencia del partido que gane las elecciones, el manejo de la economía estará en manos de alguno de los especialistas y del staff de uno de los mencionados centros de investigación y que la orientación de la política será neoliberal. Este es, finalmente, el principal motivo por el que muchos ciudadanos consideren que votar en las próximas elecciones no vale la pena el esfuerzo.

Frente al proceso político descrito, la socialdemocracia ha reaccionado de manera pasiva y defensiva. Desde el retorno de la democracia en 1983, no ha logrado transformar sus contenidos doctrinarios ni sus formas de organización tradicionales. La más prestigiosa de las instituciones que se ocuparon de desarrollar el pensamiento socialdemócrata en estos años, a saber, el Club de Cultura Socialista (CCS) fundado en julio de 1984 en Buenos Aires, mantuvo

el tipo de estructura organizativa propia de un círculo o comunidad informal, sin avanzar en absoluto hacia una profesionalización de sus actividades. No se han creado en estos años instituciones comparables a los centros científicos arriba mencionados que puedan generar conocimientos y estrategias políticas y formar especialistas que las lleven a cabo, pero desde una orientación política de izquierda.

Esta situación de la socialdemocracia en Argentina contrasta llamativamente con el desarrollo político del Brasil. En este último país, la modernización de la izquierda es un proceso que comienza a desarrollarse sostenidamente desde fines de los años 70 en torno a dos centros de investigación altamente profesionales, Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) y Cedec (Centro de Estudos de Cultura Contemporânea), fundados respectivamente en 1969 y 1976 en San Pablo. Estas instituciones tienen todas las características propias de un centro de investigación moderno: un equipo de científicos con dedicación completa, numerosas vinculaciones con la comunidad científica internacional, financiación diversificada a través de fundaciones y empresas privadas, amplia capacidad para la producción de conocimientos, para la elaboración de estrategias técnicas de gobierno y para la formación de especialistas.

A partir de la capacidad técnica y el personal especializado proporcionado por Cebrap, Cedec y otros centros científicos de menor envergadura, la socialdemocracia logra alcanzar, en Brasil, una posición política enteramente análoga a la que la nueva derecha posee en Argentina y que se caracteriza por dos aspectos: a) decisiva influencia en la conformación de la agenda de debate público b) presencia permanente en el Gobierno. Una comparación de los datos políticos más superficiales confirma esta hipótesis. En los últi-

mos años, los presidentes de Argentina han sido dos políticos conservadores, Menem y De La Rúa, ambos líderes en el sentido latinoamericano tradicional. Un "caudillo" en el primer caso, de gran habilidad demagógica y dudosa moralidad. Un jurista del estilo más clásico en el segundo caso, cuya principal virtud es la honestidad. Nadie ha pretendido jamás que ellos tengan alguna clase de conocimiento especializado en los asuntos técnicos del Gobierno (se diría incluso que están por encima de tales detalles). En Brasil, mientras tanto, ocupa el cargo de presidente Fernando Henrique Cardoso, un especialista en ciencias sociales de gran prestigio en la comunidad científica internacional, que dirigió durante muchos años uno de los centros de investigación arriba mencionados (el Cebrap) y fue uno de los fundadores de la socialdemocracia brasileña.

Ante el carácter *amateur* no solamente de los presidentes, sino de prácticamente todos los líderes de los partidos tradicionales, la política económica argentina de estos años es planificada y dirigida por especialistas neoliberales (de entre los que se destaca Domingo Cavallo), con relativa independencia de la orientación ideológica del Gobierno (que se torna así parcialmente irrelevante). El énfasis de esta política está en la estabilidad de la moneda, lo que ha llevado a adoptar un esquema de convertibilidad (*currency board*), aun conociendo sus efectos negativos sobre el sector productivo y el nivel del empleo. Mientras tanto, en Brasil, la política económica ha privilegiado el crecimiento de la estructura productiva y exportadora, utilizando una estrategia monetaria mucho más flexible. Esta oposición de políticas macroeconómicas se corresponde, sin duda, con una agenda pública de diferente signo ideológico.

Ante el proceso de modernización de la derecha y su progresiva conquista de

poder político, la socialdemocracia en Argentina, como queda dicho, se instala en una estrategia meramente defensiva. La agenda de reforma neoliberal incluye los tópicos que son característicos de esta orientación ideológica: privatización de empresas públicas, estabilidad monetaria, reducción del déficit fiscal, incremento de la eficiencia de las agencias estatales, desregulación de la economía, etc. El objetivo de la socialdemocracia, por su lado, se vuelve enteramente conservador (aunque esto suene paradójico): mantener la estructura del Estado y la orientación del gasto público según el tipo de legislación y programas sociales que se habían desarrollado en Argentina desde mediados del siglo. Se produce así una especie de círculo vicioso entre dicha estrategia defensiva y la ausencia de modernización de las formas organizativas y el pensamiento de la izquierda. La ausencia de centros de investigación modernos hace una renovación doctrinaria y una acumulación de conocimientos y capacidades técnicas imposible, pero esto último tampoco resulta necesario, al fin y al cabo, puesto que la estrategia política se ha definido como una defensa del *statu quo*.

La estrategia socialdemócrata fracasa en varios sentidos. El tipo de Estado social que había sido creado en Argentina a partir de mediados de siglo se encuentra, para mediados de los 80, ampliamente desprestigiado. A medida que la situación económica empeora durante el Gobierno de Alfonsín (1983-1989), la creciente desocupación y la baja del salario real vuelven manifiesto el hecho de que los empleados estatales son una minoría de privilegiados. Tanto las empresas públicas como los programas sociales son afectados por una gran ineficiencia, dilapidación de recursos y corrupción. Buena parte del gasto estatal se orienta según criterios clientelistas. La socialdemocracia

evita hacerse cargo de esta realidad y el programa neoliberal de Menem, que se había iniciado con su acceso a la presidencia en 1989, pero que se consolida a partir de 1991 con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, es respaldado por una amplia mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de 1995.

El cambio de Gobierno en 1999, ya mencionado antes, señala un momento de aparente recuperación política de la socialdemocracia. La alianza entre la UCR y el Frepaso se define como una fuerza política de centro-izquierda, si bien su candidato a presidente, De La Rúa, sostiene ideas predominantemente conservadoras. Es probable que este último factor haya contribuido al progresivo giro de la política, a poco de iniciarse el Gobierno, hacia una orientación neoliberal, que incluye la convocatoria de varios destacados especialistas de la nueva derecha, hasta llegar al propio Cavallo. Pero el factor decisivo para explicar este proceso es, a mi modo de ver, el hecho de que la socialdemocracia no estaba en condiciones de presentar una similar capacidad técnica para ocuparse del Gobierno. Esto queda demostrado, finalmente, con la puesta en práctica del plan de "déficit cero" desarrollado por Cavallo: si bien la socialdemocracia ha criticado duramente este plan por su falta de atención a los problemas sociales, lo apoyó de manera consistente para que fuera aprobado en el Congreso. Los intentos de presentar, en el último minuto, algunas propuestas alternativas, carecieron de convicción y de fundamento.

Durante este año, a medida que la situación económica se volvía cada vez más grave, resultó evidente que la socialdemocracia carece por completo de figuras de reconocida solvencia, que hubieran podido generar confianza en circunstancias de crisis. Esta enorme debilidad política tuvo como resultado que, habiendo

triunfado en las elecciones hace menos de dos años, la socialdemocracia haya sido, en nuestros días, desplazada del Gobierno y del poder. Aquí se aplica plenamente la hipótesis que ya habíamos comentado: la capacidad para desarrollar una campaña política no se corresponde en absoluto con la capacidad para gobernar.

Para terminar, consideremos una vez más el hecho de que muchos ciudadanos no van a presentarse a votar en las elecciones de octubre. A la vista del reciente proceso político, están convencidos de que es inútil molestarse, pues de todas formas el neoliberalismo termina planificando las políticas públicas de todos los Gobiernos. Mientras no se produzca en Argentina una efectiva modernización de la socialdemocracia, es tan incorrecto como arrogante pensar que este absentismo representa la mera falta de compromiso con los valores democráticos. Representa, por el contrario, un juicio político maduro y acertado.

Agustín Ferraro es investigador visitante en el Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (agustinferraro@yahoo.com).

Sabine Donner
y **Armando García Schmidt**

Diseñar el cambio - estrategias de transformación

Las investigaciones y el simposio internacional en torno a la entrega del Premio Carl Bertelsmann 2001

El día 12 de septiembre de 2001 fue otorgado el Premio Carl Bertelsmann

2001 en Gütersloh (Alemania) bajo el lema “Diseñar el cambio - estrategias de transformación”. Una labor investigadora de varios años y un simposio internacional precedieron a la entrega del premio, cuyo objetivo fue destacar los esfuerzos más meritorios en el cambio pacífico desde formas de gobierno autoritarias y sistemas económicos dominados por el Estado, hacia la democracia y la economía de mercado. Por primera vez se otorgó el Premio Carl Bertelsmann a un país latinoamericano, Bolivia, por sus importantes realizaciones en el desarrollo de los fundamentos para el Estado de derecho. Junto al ex ministro de Justicia de Bolivia, René Blattmann, y a la actual Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, recibieron asimismo el premio prestigiosos actores políticos de Polonia que han contribuido también a un ejemplar proceso de transformación hacia la democracia y la economía de mercado.

1. La investigación

A pesar de que existen múltiples experiencias en la transformación de sistemas estatales y sociales, los conocimientos científicos acerca de estos procesos son más bien fragmentarios. Por eso, la Fundación Bertelsmann de Alemania decidió, en el año 1996, junto al Centro de Ciencias Políticas Aplicadas (CAP) de la Universidad de Munich, emprender una investigación a fondo sobre los procesos de desarrollo y de transformación. El punto de partida fue la constatación de que una multitud de Estados atraviesan procesos de desarrollo o de transformación hacia la democracia y la economía de mercado y que muchos otros Estados tendrán que llevar a cabo tales transformaciones en el futuro. Sin embargo, no existían a la fecha conceptos suficientemente claros que